

Santiago, trece de enero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que mediante presentación de fecha 28 de febrero de 2019 comparece el señor Pedro Peña Sánchez, abogado, en representación de los señores José Cifuentes Yáñez, técnico en construcción, y Susana Quito Quinteros, asistente social, todos domiciliados para estos efectos en avenida Las Condes N° 11.380, oficina 91, Comuna de Vitacura, y deduce demanda en contra de la I. Municipalidad de Lo Prado, representada legalmente por el señor Maximiliano Ríos Galleguillos, ambos domiciliados en San Pablo N° 5959, comuna de Lo Prado.

Funda su demanda en que ambos prestaron servicios para la demandada, la señora Quito Quinteros desde el 1 de noviembre de 2011, y el señor José Cifuentes Yáñez desde el 14 de enero de 2011, a través de múltiples contratos de honorarios; sin embargo, la relación contractual se desarrolló bajo vínculo de subordinación y dependencia hasta el día que fueron despedidos, el 31 de diciembre de 2018.

Explica que la señora Susana Quito realizó labores como "encargada comunal de habitabilidad, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitarios de la I. Municipalidad de Lo Prado", y el señor José Cifuentes como "supervisor de habitabilidad en terreno, también dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitarios de la I. Municipalidad de Lo Prado".

Señala que se trata de trabajos habituales, genéricos y permanentes en la organización jerárquica del municipio, estando sujeto a jornada de trabajo, poder de mando de sus superiores y deber de obediencia. Agrega, que durante el tiempo que prestaron servicios para la demandada realizaron numerosas funciones.

Hace presente que sus representados nunca fueron contratados como funcionarios municipales en ninguna de sus categorías conforme lo dispuesto en la ley N° 18.883, debido a que no ingresaron a prestar servicios en la forma que dichas normativas especiales prevén, ni en las condiciones que esa normativa establece: planta; contrata o suplente, desarrollando funciones genéricas. Además, las labores prestadas jamás fueron no habituales de la demandada, tampoco se trató de cometidos específicos, ni servicios transitorios y temporales, siendo aplicable la normativa laboral.

Explica que sus representados fueron despedidos el 31 de diciembre de 2018 verbalmente, sin cumplir con ninguna de las formalidades legales, vulnerando el artículo 162 del Código del Trabajo, siendo informada la señora Quito Quinteros el día 29 de noviembre de 2018 y el señor Cifuentes



Yáñez el día 30 de noviembre que a partir del 31 de diciembre no se les renovarían el contrato.

En consecuencia, y conforme señala el artículo 168 inciso primero, los despidos debe entenderse realizado sin causal legal.

Indica que la remuneración de sus representados ascendía a \$520.832 cada uno, exigiendo la demandada, previo pago de la remuneración, la confección de un informe de actividades que se adjuntaba a la boleta de honorario de dicho mes. Dicho informe daba cuenta de las funciones desarrolladas.

Explica que la demandada no dio cumplimiento a su obligación de pagar las cotizaciones de seguridad social, razón por la cual debe ser condenada al pago de la sanción prevista en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo.

Previos fundamentos de derecho, solicita:

1.- Se declare la existencia de la relación laboral de los demandantes con la demandada de autos, desde las fechas indicados por éstos.

2.- Se declare que estos han sido desarrollados en forma continua.

3.- Se condene al demandado al pago de las siguientes prestaciones respecto de cada uno de los actores:

I.- Susana Quito Quinteros:

1.- Indemnización sustitutiva de aviso previo por la siguiente cantidad: \$520.832.

2.- Indemnización por años de servicios, por \$3.645.824.

3- Incremento legal previsto en la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo, por \$1.822.912.

4.- Feriado legal por todo el período trabajado, por \$2.656.233.

5.- Feriado proporcional, por \$60.763.

6.- Cotizaciones de seguridad social por todo el tiempo trabajado.

7.- Remuneraciones desde la fecha del despido hasta su convalidación, atendido lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo.

II.- José Cifuentes Yáñez:

1.-Indemnización sustitutiva de aviso previo por la siguiente cantidad: \$520.832.

2.- Indemnización por años de servicios, por \$4.166.656.

3.- Recargo del 50% contemplado en la letra b) del artículo 168 del Código Laboral, por \$2.083.328.

4.- Feriado legal, por \$2.656.233.



5.- Feriado proporcional, por \$325.518.

6.- Cotizaciones de seguridad social por todo el tiempo trabajado.

7.- Remuneraciones desde la fecha del despido hasta su convalidación, atendido lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo.

Todo con reajustes, intereses y costas.

Segundo: Que comparece el señor Carlos Olivari Contreras, abogado, por la demandada I. Municipalidad de Lo Prado, solicitando el **rechazo** de la acción promovida con costas y, en subsidio, se rechace la acción de nulidad de despido promovida.

En primer término, expresa que de conformidad a lo previsto en el artículo 2° de la ley 18.575, en relación al artículo 3 de la ley N° 18.883, debe concluirse que los Municipios tienen prohibido contratar personal a su cargo sujeto a las normas del Código del Trabajo fuera de los casos específicamente señalados en la ley, permitiendo la última normativa citada sólo las contrataciones de personal a planta, contrata y en casos excepcionales a honorarios, siendo dos normas la que facultan la contratación de dicha forma: artículo 4° de la ley 18.883, y el Decreto N° 584 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que contempla la contratación de personas naturales para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social cultural de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia.

Por su parte, el decreto N° 1.186, de 2007 del Ministerio de Hacienda agregó en el clasificador de gastos contemplado en el decreto N° 854 de 2004 de la misma Secretaria de Estado al subtítulo 21, gastos en personal, ítem 04, otros gastos en personal, la asignación 004 “Prestaciones de Servicios en programas Comunitarios”, con la siguiente definición: “Comprende la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios ocasionales ii/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de los respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia desarrolladas en cumplimiento de funciones previstas en el artículo 4° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades”.



Señala que, en la especie, los actores fueron contratos en el marco de un programa externo al municipio, denominado habitabilidad dependiente de la SEREMI de Desarrollo Social, desarrollando el vínculo contractual con los actores dentro del referido programa, siendo la SEREMI ya indicada el organismo que determina la forma como se ejecutará el programa como también los términos contractuales por los cuales se regirán los contratos a honorarios.

En ese contexto se pactó honorarios de carácter mensual que requería, para llevar a efecto el pago, acompañar la boleta de honorarios y presentar un informe mensual que describiera las actividad, correspondiendo a la Dirección de Desarrollo Comunitario velar por el cumplimiento del contrato de prestación de servicios.

Además, a los actores no se les exigió por parte de la autoridad el cumplimiento de una jornada laboral, no existiendo registros físicos, ni digitales de asistencia, en los cuales se acredite o conste el registro o cumplimiento de horario.

Estima que exigir a los órganos de la administración del estado celebrar contratos de trabajo con las personas naturales que prestan servicios a aquellas o asignarle dicha calificación jurídica a los contratos de honorarios que celebre con estos, transgrede el principio de legalidad, el artículo 7° de la Constitución Política de la República.

En subsidio, de estimarse que existió una relación laboral con los demandantes, solicita se rechace la acción nulidad del despido, por incerteza de la existencia de la mencionada relación.

Tercero: Que con fecha 17 de abril de 2019 se celebró la audiencia preparatoria con la asistencia de ambas partes. Se efectuó el llamado a conciliación la que no se produjo, fijándose el siguiente hecho controvertido: Existencia de relación laboral entre los demandantes y la demandada Ilustre Municipalidad de Lo Prado en los términos que lo indican en su libelo. En la afirmativa, naturaleza, circunstancias, pormenores, funciones que desempeñaban los actores, fecha de inicio y término, monto de la remuneración que percibían por la prestación de sus servicios para efectos imponibles por cada uno de los meses que señalan se habría extendido la relación laboral, última remuneración mensual devengada como base de cálculo para los efectos de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, hechos que habrían motivado el despido y formalidades del mismo, estado pago de las cotizaciones previsionales, de salud y AFC de los actores



a la fecha de terminación de sus servicios, prestaciones adeudadas y su monto.

Cuarto: Que la parte demandante incorporó los siguientes elementos de convicción:

Documental.

Respecto de don José Cifuentes:

1.- Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 30 de septiembre de 2010.

2.- Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 14 de enero de 2011.

3.- Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 19 de enero de 2015.

4.- Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 28 de enero de 2016.

5.- Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 23 de enero de 2017.

6.- Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 29 de enero de 2018.

7.- Carta de notificación emitida por la demandada al actor con fecha 30 de noviembre de 2018.

8.- Informe de Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas correspondiente al año 2012 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por el actor con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 1, 2, 3, 4, 10, 14, 17, 18 y 20, todas del mismo año.

9.- Informe de Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas correspondiente al año 2013 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por el actor con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 23, 28, 31, 33, 40, 42, 43, 44, 46, 48 y 49, todas del mismo año.

10.- Informe de Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas correspondiente al año 2014 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por el actor con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 50, 51, 52, 53, 54, 59 y 61, todas del mismo año.

11.- Informe de Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas correspondiente al año 2015 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por el actor con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 63, 65, 68, 70, 73 y 74, todas del mismo año.

12.- Informe de Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas correspondiente al año 2016 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas



por el actor con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 78, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96 y 97, todas del mismo año.

13.- Informe de Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas correspondiente al año 2017 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por el actor con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 98, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 116, 119, 121, 122 y 123, todas del mismo año.

14.- Informe de Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas Correspondiente al año 2018 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por el actor con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 126, 130, 133, 138, 143, 145, 150, 153, 159, 163, 168 y 170, todas del mismo año.

15.- Memo N°899 en donde se acompaña informe de actividades del actor correspondiente al mes de julio de 2017.

16.- Memo N°1532 en donde se acompaña informe de actividades del actor correspondiente al mes de diciembre de 2017.

17.- Memo N°178 en donde se acompaña informe de actividades del actor correspondiente al mes de enero de 2018.

18.- Memo N°302 en donde se acompaña informe de actividades del actor correspondiente al mes de febrero de 2018.

19.- Memo N°416 en donde se acompaña informe de actividades del actor correspondiente al mes de marzo de 2018.

20.- Memo N°557 en donde se acompaña informe de actividades del actor correspondiente al mes de abril de 2018.

21.- Memo N°663 en donde se acompaña informe de actividades del actor correspondiente al mes de mayo de 2018.

22.- Memo N°757 en donde se acompaña informe de actividades del actor correspondiente al mes de junio de 2018.

23.- Memo N°935 en donde se acompaña informe de actividades del actor correspondiente al mes de julio de 2018.

24.- Memo N°1075 en donde se acompaña informe de actividades del actor correspondiente al mes de agosto de 2018.

25.- Memo N°1181 en donde se acompaña informe de actividades del actor correspondiente al mes de septiembre de 2018.

26.- Memo N°1270 en donde se acompaña informe de actividades del actor correspondiente al mes de octubre de 2018.

27.- Memorándum N°69 de fecha 15 de enero de 2018.

Respecto de doña Susana Quito:

1.- Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 21 de enero de 2014.



2.- Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 04 de septiembre de 2014.

3.- Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 19 de enero de 2015.

4.- Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 28 de enero de 2016.

5.- Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 23 de enero de 2017.

6.- Contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 29 de enero de 2018.

7.- Decreto Alcaldicio N°045 de fecha 20 de enero de 2015.

8.- Decreto Alcaldicio N°634 de fecha 17 de agosto de 2015.

9.- Decreto Alcaldicio N°79 de fecha 25 de enero de 2018.

10.- Informe de Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas correspondiente al año 2011 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 93 y 95, todas del mismo año.

11.- Informe de Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas correspondiente al año 2012 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108 y 111, todas del mismo año.

12.- Informe de Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas correspondiente al año 2013 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 122, todas del mismo año.

13.- Informe de Anual de boletas de Honorarios Electrónicas correspondiente al año 2014 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 123, 124, 125, 126, 127, 128 a 131, todas del mismo año.

14.- Informe de Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas correspondiente al año 2015 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 136 a 141, todas del mismo año.

15.- Informe de Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas correspondiente al año 2016 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 142, 143, 144, 145, 146, 147 a 166, todas del mismo año.



16.- Informe de Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas correspondiente al año 2017 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176 a 186, 188, 189, 191, 192, 194 y 195, todas del mismo año.

17.- Informe de Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas correspondiente al año 2018 y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora con cargo a la I. Municipalidad de Lo Prado, números 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 a 220, todas del mismo año.

18.- Memo N°619 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de mayo de 2017.

19.- Memo N°1048 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de agosto de 2017.

20.- Memo N°1533 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de diciembre de 2017.

21.- Memo N°179 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de enero de 2018.

22.- Memo N°212 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de enero de 2018.

23.- Memo N°304 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de febrero de 2018.

24.- Memo N°436 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de marzo de 2018.

25.- Memo N°556 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de abril de 2018.

26.- Memo N°670 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de mayo de 2018.

27.- Memo N°756 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de junio de 2018.

28.- Memo N°827 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de junio de 2018.

29.- Memo N°923 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de julio de 2018.

30.- Memo N°1043 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de agosto de 2018.

31.- Memo N°1180 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de septiembre de 2018.



32.- Memo N°1271 en donde se acompaña informe de actividades de la actora correspondiente al mes de octubre de 2018.

33.- Actas de supervisión de proyectos suscritas por la actora con fecha 13 de febrero de 2014 y 26 de enero de 2016.

34.- Fotografía impresa en color de credencial institucional de la actora.

Confesional.

Declaró en representación de la demandada el señor José Cifuentes, quien manifestó: que el programa de habitabilidad es un programa que viene financiado por organismos externos de la demandada, Mideplan y Fosis, sobre 10 a 15 años. Explica que los nombres van cambiando pero el programa es el mismo. A la fecha aún se sigue con el programa sin saberse si el próximo año continuará. Indica que el programa depende de que se pueda financiar. Refiere que tratándose de trabajadores de honorarios no están sujetos a un cumplimiento de horario, sino que están contratados para cumplir una finalidad específica.

Son programas que tienen por objeto hacer mejoras a los espacios que viven los trabajadores. Depende de la DIDECO.

Testimonial.

Carlos Palma, que la señora Susana era la coordinadora del programa en que trabajaba en la demandada, de habitabilidad y el segundo era el supervisor. Señala que el programa reparaba viviendas. Señala que don José estaba todo el día con los trabajadores, realizaba labores en terreno. Trabajaba con don José de lunes a viernes, a veces los sábados. La señora Susana la veía día por medio y en semanas todos los días. A la señora Susana siempre la veía en la oficina en la que estaba. Dependían los demandantes de don David Castro. Trabajaban en una oficina pequeña con sus notebooks, realizando trabajos e informes. Trabajó 3 años en la municipalidad aproximadamente, don Gonzalo supervisaba las obras, y la señora Susana algo similar.

Contrainterrogado, señala que entró como carpintero, era contratado a honorarios,

Exhibición de documentos.

La parte demandante solicitó la exhibición de una serie de documentos:

Respecto de don José Cifuentes:

1.- Informes de actividades del actor emitidos durante el periodo demandado, desde el 14 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2018.



2.- Contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes respecto al periodo demandado, esto es, desde el 14 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2018.

3.- Decretos de aprobación de contratos de prestación de servicios del actor respecto al periodo demandado, esto es, desde el desde el 14 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2018.

4.- Libro y/o registro de asistencia en donde consten las entradas y salidas del actor que van desde el 14 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2018.

Respecto de doña Susana Quito:

1.- Informes de actividades de la actora emitidos durante el periodo demandado, esto es, desde el 01 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2018.

2.- Contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes respecto al periodo demandado, esto es, desde el 01 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2018.

3.- Decretos de aprobación de contratos de prestación de servicios de la actora respecto al periodo demandado, esto es, desde el desde el 01 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2018.

4.- Libro y/o registro de asistencia en donde consten las entradas y salidas de la actora que van desde el 01 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2018.

La parte demandante solicitó que se haga efectivo el apercibimiento legal del 453 N° 5 del Código del Trabajo respecto de doña Susana Quito del periodo que va del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2016. Respecto a los informes de actividades de la actora, también de los contratos de prestación de servicios y de los decretos de aprobación de contrato. También de la no exhibición de libros o registro de asistencia, esto último respecto del señor José Cifuentes Yáñez también.

Quinto: Que, por su parte, la demandada incorporó los siguientes antecedentes probatorios:

Documental.

1.- Contrato de honorarios de fecha 29 de enero de 2018, suscrito por demandada y Susana Quito; 29 de enero de 2018, suscrito por demandada y José Cifuentes; 23 de enero de 2017, suscrito por demandada y Susana Quito; 23 de enero de 2017, suscrito por demandada y José Cifuentes; 28 de enero de 2016, suscrito por demandada y Susana Quito; 28 de enero de 2016, suscrito por demandada y José Cifuentes; 19 de enero de 2015,



suscrito por demandada y Susana Quito; 19 de enero de 2015, suscrito por demandada y José Cifuentes; 04 de septiembre de 2014 suscrito por demandada y José Cifuentes; 21 de enero de 2014 suscrito por demandada y Susana Quito; 04 de septiembre de 2013, suscrito por demandada y Susana Quito; 04 de septiembre de 2013, suscrito por demandada y José Cifuentes.

2.- Resolución exenta 519, de fecha 18 de agosto de 2014, SEREMI de Desarrollo Social.

3.- Decreto Alcaldicio 1879, de fecha 30 de julio de 2012 que aprueba programa

4.- Decreto Alcaldicio 2163, de fecha 03 de octubre de 2011 que aprueba programa

5.- Decreto Alcaldicio 1563, de fecha 23 de agosto de 2010 que aprueba programa

6.- Decreto Alcaldicio 079, de fecha 25 de enero de 2018 que aprueba contratación a honorarios

7.- Decreto exento 2791, de fecha 29 de diciembre de 2017, que contiene convenio de transferencia de recursos.

8.- Decreto exento 010, de fecha 05 de enero de 2017, que contiene convenio de transferencia de recursos.

9.- Decreto Alcaldicio 071, de fecha 20 de enero de 2017, que aprueba contratación a honorarios.

10.- Decreto Alcaldicio 34, de fecha 06 de enero de 2011, que aprueba contratación a honorarios.

11.- Decreto Alcaldicio 2353, de fecha 25 de octubre de 2011, que aprueba contratación a honorarios.

12.- Decreto Alcaldicio 1131, de fecha 03 de mayo de 2012, que aprueba contratación a honorarios.

13.- Decreto Alcaldicio 2144, de fecha 17 de agosto de 2012, que aprueba contratación a honorarios.

14.- Decreto Alcaldicio 247, de fecha 07 de enero de 2013, que aprueba contratación a honorarios.

15.- Decreto exento 246, de fecha 17 de enero de 2013, que aprueba contratación a honorarios.

16.- Decreto exento 2595; de fecha 06 de septiembre de 2013, que aprueba contratación a honorarios

17.- 18 set de documentos correspondientes desde el mes de enero a diciembre de 2018, que contiene comprobantes de egreso, memorándum de



prestación de servicios satisfactorios, boletas de honorarios emitidos por los actores, informes mensuales de trabajo emitidos por los actores, decretos de pago, comprobantes de egreso y comprobantes de transferencias de honorarios en relación a la prestación de los servicios respecto de los meses señalados en relación a los demandantes,

18.- 13 set de documentos correspondientes desde el mes de enero a diciembre de 2017, que contiene comprobantes de egreso, memorándum de prestación de servicios satisfactorios, boletas de honorarios emitidos por los actores, informes mensuales de trabajo emitidos por los actores, decretos de pago, comprobantes de egreso y comprobantes de transferencias de honorarios en relación a la prestación de los servicios respecto de los meses señalados en relación a los demandantes.

Confesional.

Comparece el señor José, quien interrogado señaló; señala que es técnico constructor, realizaba labores en el programa de habitabilidad en la demandada, realizaba diagnósticos con la señora Susana Quito, que consistía en realizar salidas a terreno. Luego tenían que hacer las propuestas técnicas; informar a las familias si fueron aceptadas por el programa; también hacían un listado de pedidos de los materiales; tenía que recibir el material en bodega y ordenarlo y participar en las construcciones; que la empresa Kairos es una empresa que estaba a nombre de su cuñado, autorizando el señor David Castro para licitarlo; señala que trabajaba para constructora Kairos, quien le pagó sus cotizaciones.

Testimonial.

Atilio Fuenzalida, señala que es jefe de recursos humanos de la demandada. Indica que la política de recursos humanos del municipio hay funcionarios municipales a planta, contrata y honorarios. Respecto de tales personas funciona la unidad como custodia de los contratos. Señala que los horarios no marcan asistencia, la que está dirigida para los trabajadores titulares y planta. Refiere que los contratos de honorarios son redactados por la unidad de Secretaría Municipal. El programaba de habitabilidad cree que está en movilidad social. No sabe donde trabajaban los demandantes.

Sexto: Que la prueba incorporada en estos autos, analizada de conformidad a las reglas de la sana crítica, permiten concluir:

1.- Que la señora Susana Quito Quinteros estuvo ligada contractualmente con la demandada a través de un conjunto de contratos de honorarios desde, al menos, en el mes de abril de 2011, lo que se desprende de los informes de boletas de honorarios acompañados por la parte



demandante, que dan cuenta que desde esa fecha se emitieron estas a nombre de la demandada para distintas labores.

2.- Que el señor José Cifuentes Yáñez suscribió desde el año 2011 un conjunto de contratos de honorarios con la demandada, cuestión que aparece del contrato de honorarios de ese trabajador incorporado a estos antecedentes y los informes de boletas de honorarios del trabajador que da cuenta de la emisión de boletas a nombre de la demandada.

3.- Que hasta el año 2015 la relación contractual de los demandantes con el municipio fue discontinua, existiendo continuidad de los actores sólo a partir del mes de enero de 2016. A dicho aserto se arriba teniendo a la vista los diversos contratos de honorarios acompañados y los informes de boletas de honorarios en los cuales precisamente no figura una continuidad de servicios. Así, tratándose de Susana Quinteros en el año emitió sólo dos boletas a nombre del municipio, en el año 2012 9, en el 2013 y 2014 10 y en el año 2015 6; asimismo, de los contratos de honorarios aparece que la actora sólo era contratada por períodos de tiempo y no toda la anualidad durante ese período; por su parte, respecto del señor José Cifuentes consta que en el año 2011 fue contratado hasta marzo de 2011, en los años 2012 y 2013 emitió 10 boletas, en el año 2014 5 y en el año 2015 7. Los antecedentes acompañados permiten concluir que sólo a partir de enero de 2016 la I. Municipalidad de Lo Prado contrataba a los actores sucesivamente durante toda la anualidad, lo que también se ve reforzado con los informes de boletas de honorarios de los demandantes.

En otro orden de ideas, cabe señalar que tampoco la confesional o testimonial de alguna de las partes permite desprender una continuidad de la prestación de servicios con anterioridad al mes de enero de 2016.

4.- Que la señora Susana Quinteros realizaba labores de coordinadora de programa que ha tenido diversos nombres, siendo el último de ellos “habitabilidad”, desarrollando labores de regular visitas domiciliarias, realizar diagnósticos, elaborar documentos para el funcionamiento del programa, asistir a reuniones, mantener al día informe en “SIGEC”, elaboración de diagnósticos, propuestas técnicas, apoyo administrativo; por su parte el señor José Cifuentes Yáñez realizó labores en el mismo programa de supervisor en terreno, que consistían en realizar diagnósticos constructivos de intervenciones a ejecutar, elaboración de propuestas técnicas, supervisar en terreno a equipos de maestros. A dicha conclusión se arriba de los contratos de honorarios acompañados, las resoluciones administrativas que aprobaron cada una de estas convenciones y de la testimonial del



demandante, carpintero que también desarrolló labores para el referido programa quien manifestó que los demandantes realizaban esta función para el municipio.

5.- Que el último precio pactado por los servicios de cada uno de los demandantes ascendía respecto del señor José Cifuentes Yáñez a \$520.833 y a la señora Susana Quito Quinteros de \$520.832, ambos brutos, lo que aparece de la cláusula segunda de los contratos de honorarios de los demandantes, lo que coincide con las boletas de honorarios.

4.- Que los demandantes debían cumplir una jornada de trabajo y sus labores eran supervisadas por la jefatura directa de los actores, la señora Carolina Cisternas Márquez, encargada municipal del Programa de Habitabilidad, debiendo ser visado el trabajo además por la Directora de Desarrollo Comunitario a fin de instruir el pago de los honorarios de los demandantes. Lo expuesto fluye de los diversos memos acompañados por ambas partes 6 y los contratos de honorarios, en los que se estipuló la certificación previa de la Directora de Desarrollo Comunitario de los informes de trabajo acompañados por los demandantes para proceder al pago. Por otra parte, de los memos aparece que los actores debían informar las actividades que realizaban mensualmente, los que eran certificados por la encargada municipal del Programa de Habitabilidad y luego pasar por una segunda visación de la Directora de Desarrollo Comunitario.

5.- Que la demandada, al menos desde el año 2010, ha suscrito anualmente convenios primero con el Ministerio de Planificación y luego con el Ministerio de Desarrollo Social a fin que los municipios implementen un programa denominado “Plan de Habitabilidad”, dependiente de los ministerios ya individualizados, programa a través del cual el Ministerio ha transferido recursos al municipios, convenios que tienen una vigencia de 12 meses, encontrándose a cargo de la administración del mismo programa la Dirección de Desarrollo Comunitario. A dicha conclusión se arriba de la revisión de los múltiples decretos acompañados por la la demandada que aprueban los convenios suscritos con el Ministerio de Desarrollo Social que aprueban el programa de habitabilidad

6.- Que el día 30 de noviembre de 2018 los demandantes fueron informados que no se les renovarían el contrato de honorarios para el año 2019.

Séptimo: Que encontrándose controvertido que los demandantes prestaron servicios para la demandada bajo subordinación y dependencia en el marco de una relación laboral, es de cargo de éstos acreditar que las



labores prestadas se desarrollaron bajo un vínculo que reúna dichas características, de conformidad a lo previsto en el artículo 1698 del Código Civil.

Octavo: Que el artículo cuarto de la ley 18.883 regula la habilitación de las Municipalidades para contratar a personal bajo la modalidad de honorarios. Dicha norma señala: "Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la Municipalidad; mediante decreto del Alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales".

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto".

De la norma citada precedentemente aparece que los órganos municipales se encuentran facultados para contratar a honorarios cuando deban realizarse labores accidentales y no habituales del municipio; cuando se requiera la contratación de extranjeros que posean título de una especialidad que se requiera; o cuando se requieran servicios para cometidos específicos conformes a las normas generales.

Noveno: Que para determinar si resulta aplicable a los actores las normas contenidas en el Código del Trabajo por haber desarrollado las funciones en el marco de una relación contractual de carácter laboral, primero debe analizarse si el órgano de la administración pública se excedió de sus facultades que le confiere la ley al contratar a la actora bajo la modalidad de contrato a horarios, tipo de contrato cuya suscripción ha sido reconocida por ambas partes o, por el contrario, las funciones para las cuales fue contratada se enmarcan en alguna de las situaciones fácticas que prevé el artículo 4° del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales para contratar la prestación de servicios personales bajo la modalidad de contrato de horarios, regidos por las normas del propio contrato y las que regulan el arriendo de servicios inmateriales, conforme al artículo 2006 y siguientes del Código Civil.

Décimo: Que de los diversos convenios suscritos entre la demandada el Ministerio de Planificación en principio y luego con el Ministerio de Desarrollo Social aparece que los referidos organismos anualmente



transferían fondos a la corporación para la ejecución del denominado “Programa de Habitabilidad”, encargándoseles la ejecución del referido programa, cuya ejecución era de cargo del Ministerio de Desarrollo Social, siendo contratado los demandantes año a año para dicho programa, por lo que no es posible considerar que los actores fueron contratados para labores accidentales y no habituales para el municipio. En efecto se trata de trabajadores que están desarrollando labores de supervisor en terreno y encargada del programa desde el año 2010 y de forma continúa desde el 2016, programa que si bien se va renovando anualmente malamente puede ser calificado como labores accidentes y no habituales, más cuando de conformidad a lo previsto en la letra d) del artículo 3° de la ley 18.595 una de las funciones del municipio es la de promover el desarrollo comunitario y se está desarrollando desde, al menos, 9 años; tampoco puede estimarse que los demandantes desarrollaban labores específicas, las que si bien se encuentran descritas en los contratos de honorarios su descripción resulta suficientemente genérica, lo que resulta propio de las labores que desarrollaban, de encargadas del programa de habitabilidad y supervisor en terreno, no pudiendo considerarse que los trabajadores desarrollaron una labor específica y acotada en el tiempo. Así, además, respecto de las funciones aparece claramente que no se encuentran suficientemente especificadas de los diversos memos que informan las actividades de los actores, muchos de ellos -planificación, confección de presupuestos, elaboración- no se encuentran contemplados en los contratos de honorarios.

En otro orden ideas, la sola circunstancia que el programa de habitabilidad sea un programa que tenga su origen en el cumplimiento de la función del actual Ministerio de Desarrollo Social y con los fondos que anualmente otorgue el referido municipio no lo convierte en labores accidentales y no habituales del municipio desde que, como se indicó, también es obligación del municipio el desarrollo comunitario. Tampoco la duración anual de cada programa desde que se ha ido renovado anualmente, no pudiendo asimilarse la transitoriedad del programa con una labor accidental y no habitual. Así, de estimarse que se trata de un programa transitorio que se renovaba anualmente I no se explica porque los trabajadores fueron contratados a honorarios y no como personal a contrata, el que por sus características se trata de un trabajador transitorio.

Undécimo: Que al no haber prestado servicios los demandantes de autos bajo la normativa de un estatuto especial o para los servicios y en las formas que dispone el artículo 4° de la Ley 18.883, o como planta, suplente o



contrata regido por el Estatuto Administrativo, no resulta entonces aplicable a su respecto la exclusión de la aplicación del Código del Trabajo y sus leyes complementarias que prevé el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, dado que no se le confirió o reconoció la calidad de funcionario de la administración del estado y no se encuentra sometido por ley a un estatuto especial, extralimitándose el municipio en sus facultades en la contratación de la demandante, suscribiendo contratos bajo la modalidad a honorarios para funciones que no se circunscriben a los presupuestos fácticos de ella.

No existiendo un estatuto especial que aplicar al caso concreto, ni ser procedente sostener que por la mera suscripción de los honorarios debe sujetarse su cumplimiento a las normas pactadas por las partes en ellos, resulta posible la aplicación de las normas del Código del Trabajo en su totalidad, pues si bien la administración se excedió de sus facultades al contratar a la actora, dicho contrato debe regularse de acuerdo a un marco legal establecido en la ley, conforme a su naturaleza, para lo cual debe dilucidarse si la forma cómo se ejecutó la prestación de servicios cumple con los requisitos de dependencia y subordinación que prevé el artículo 7° del Código del Trabajo, a objeto de determinar la existencia de la relación laboral prevista en el artículo 8° del mismo cuerpo legal.

Duodécimo: Que debe hacerse presente que si bien de conformidad a lo previsto en el artículo 7° inciso final de la Carta Fundamental al haber actuado la administración fuera de sus facultades podría considerarse que existe nulidad del acto o actos administrativos que dieron origen a la relación contractual, ella debe ser declarada, no siendo este Tribunal el competente para conocer del asunto, sin perjuicio de no haberse solicitado, por lo que corresponde determinar la naturaleza del vínculo contractual.

Décimo tercero: Que el artículo 7° del Código del Trabajo señala: “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada”.

Son elementos de éste: la prestación de servicios personales, una remuneración por tales servicios, un vínculo de subordinación y dependencia respecto de quien se obliga a prestar servicios.

Por su parte, el vínculo de subordinación y dependencia es una cuestión fáctica que se manifiesta en una serie de elementos tales como, a título meramente ejemplar, la obligación del trabajador de dedicar a la faena convenida un espacio de tiempo significativo, el cumplimiento de un horario



diario y semanal, trabajo realizado bajo pautas de dirección y organización del trabajo realizado, la supervigilancia de éste, la continuidad o permanencia de los servicios prestados, rendición de cuentas de la labor efectuada, cumplimiento de carga diaria, control por parte del empleador de la faena convenida, ajenidad en la prestación de servicios.

Décimo cuarto: Que los antecedentes del proceso permiten concluir que los demandantes cumplían personalmente funciones para la demandada, percibiendo por el pago de sus servicios una suma determinada, alcanzando respecto del señor Cifuentes \$520.833 y la señora Quito \$520.832, de conformidad al último contrato de honorarios suscrito por las partes, refrendado con las boletas de honorarios acompañadas.

Décimo quinto: Que en cuanto al elemento dependencia y subordinación, se encuentra acreditado que los actores debían cumplir una jornada de trabajo y que para que procediera el pago de los servicios que desarrollaban debían informar las funciones que realizaba a la encargada municipal del Programa de Habitabilidad, visadas y autorizadas por la Directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario, dirección de la que dependía el programa.

Décimo sexto: Que la única diferencia en el desarrollo de las funciones de los demandantes, a la luz de lo pactado, incluso literalmente en los contratos de prestación de servicios con la existencia de una relación de carácter laboral era el nombre que le dieron a la convención, sin que se advierta algún margen de independencia y decisión personal por parte de la demandante en el desempeño de sus funciones y sin margen de discrecionalidad y en forma continua, lo que aparece de los registros de asistencia de la demandante.

Por consiguiente, la ejecución de las labores para las cuales fueron contratados los demandantes se desarrolló cumpliendo con elementos característicos de la relación laboral, razón por la cual se accederá a la demanda sobre ese punto. Sin embargo, como se indicó en el numeral 5° del considerando sexto, en atención a que sólo se aprecia una continuidad de los servicios sólo a partir del año 2016, ya que con anterioridad sólo constaba que los trabajadores eran contratados sólo por espacios de tiempo y no la anualidad completa emitiendo esporádicamente boletas de honorarios que emitían a nombre de la demandada, se declarará la continuidad de la relación laboral sólo a partir del 1 de enero de 2016.

Décimo séptimo: Que el término de los servicios efectuado por la parte demandada es asimilable a la ausencia de causal y debe entenderse



como ilegal la desvinculación de los trabajadores, por lo que el término de los servicios resulta injustificado, debiendo la demandada pagar a los demandantes la indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicios -ambos por dos años y fracción superior a 6 meses de servicios- y el incremento legal prevista en la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo. Respecto al señor Cifuentes si bien la remuneración era superior la indicada, deberá considerarse la señalada por éste en el libelo, de \$520.832, a fin de evitar cualquier eventual vicio de nulidad.

En consecuencia, se le adeuda por estos conceptos al señor José Cifuentes y Susana Quito la suma de \$520.832, \$1.562.496. y \$781.248, respectivamente a cada uno.

Décimo octavo: Que no habiéndose acreditado el pago de los feriados legales devengados en los años 2017, 2018 y proporcionales -correspondiente a 11 meses y 29 días- de los demandantes, corresponde acceder a este extremo de la presentación, adeudando, en consecuencia, \$729.162 y \$363.568, respectivamente, por los conceptos ya indicados.

Décimo noveno: Que en cuanto a la acción de nulidad del despido por no pago de cotizaciones previsionales, si bien no se acreditó su pago por la demandada, no se accederá a la demanda en dicho punto, considerando que la Excma. Corte Suprema en causa rol 25.079, mediante sentencia de 4 de marzo del año 2019, ha estimado modificar su postura cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado - entendida en los términos del artículo 1° de la Ley 18.575-, pues a juicio de dicha Corte concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, argumentación que este Tribunal comparte. Por otro lado, la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 ya mencionado, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la



nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado.

Finalmente, debe tenerse presente que la sanción solicitada a aplicar tiene como fundamento la apropiación que realiza el empleador de los dineros del trabajador al momento de descontar de su remuneración los montos respectivos para proceder al pago de las cotizaciones de seguridad social, cuestión que no procede en la especie, desde que el descuento que se realiza al estipendio del trabajador tiene por objeto pagar el impuesto respectivo. En ese sentido, debe tenerse presente que la nulidad es una sanción y como tal debe ser interpretada de forma restrictiva.

Vigésimo: Que sin perjuicio lo expuesto precedentemente se acogerá la acción de cobro de cotizaciones de seguridad social, debiendo la demandada pagar las imposiciones de AFP, salud y AFC Chile de la actora, las serán calculadas según el estipendio en el numeral 5 del considerando sexto de la sentencia.

Vigésimo primero: Que el resto de la prueba rendida en autos, analizada de conformidad a las reglas de la sana crítica, en nada alteran o modifican lo razonado en estos autos.

Vigésimo segundo: Que no se condena en costas a la demandada por no ser totalmente vencida.

Por estas consideraciones y, teniendo, además, presente lo dispuesto en las disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 inciso cuarto, 10, 21, 33, 41, 42, 44, 55, 63, 67, 71, 73, 162, inciso cuarto, 168, 172, 173, 420 letra a), 446, 452, 453, 454, 456, 457, 458 y 459 del Código del Trabajo; 144 del Código de Procedimiento Civil; y 1698 del Código Civil, se declara:

I.- Que se acoge la demanda promovida por los señores José Cifuentes Yáñez y Susana Quito Quinteros, sólo en cuanto se declara:

a) Que entre las partes existió una relación laboral ininterrumpida desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018.

b) Que la desvinculación de los actores fue ilegal y carente de causa legal.

II.- Que, en consecuencia, se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:

Al señor José Cifuentes:

a) \$520.832, por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo;

a) \$1.562.496, a título de indemnización por años de servicios;



c) \$78.248, por concepto del recargo legal previsto en la letra b) del artículo 168 del Código Laboral.

d) \$729.162, por concepto de feriado legal;

e) \$363.568, por feriado proporcional.

f) cotizaciones previsionales por todo el periodo de vigencia de la relación laboral, calculadas sobre la base de una remuneración bruta mensual de \$520.832.

A la señora Susana Quito:

Respecto del señor José Cifuentes:

a) \$520.832, por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo;

b) \$1.562.496, a título de indemnización por años de servicios;

c) \$78.248, por concepto del recargo legal previsto en la letra b) del artículo 168 del Código Laboral.

d) \$729.162, por concepto de feriado legal;

e) \$363.568, por feriado proporcional.

f) cotizaciones previsionales por todo el periodo de vigencia de la relación laboral, calculadas sobre la base de una remuneración bruta mensual de \$520.832.

III.- Que, las sumas ordenas a pagar en las letras a), b) y c) del numeral II serán reajustadas y devengarán intereses de conformidad a lo previsto en el artículo 173 del Código del Trabajo; por su parte, las indicadas en las letras d) y e) serán reajustadas y devengarán intereses conforme lo indicado en el artículo 63 del mismo cuerpo legal.

IV.- Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida.

V.- Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella dentro de 5° día, en caso contrario certifíquese dicha circunstancia, pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza laboral y Previsional, de esta ciudad.

VI.- Asimismo, ejecutoriada que sea la presente sentencia oficiese a las instituciones de seguridad social respectiva para los fines pertinentes.

Devuélvanse los documentos incorporados por las partes, una vez que se encuentre firme el presente fallo.

Anótese, regístrese, notifíquese a las partes por correo electrónico y archívese en su oportunidad procesal.

RIT: O-1416-2019.



BFPHNZRFEJ

RUC: 19-4-0170420-8.

**Pronunciada por don Mauricio Guajardo Espinoza, Juez Titular del
Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.**



BFPHNZRFEJ

A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>